



SENTENCIA.- En Hermosillo, Sonora, a diecisiete de febrero del año dos mil veinticinco.

VISTOS para resolver en definitiva los autos originales del expediente número **RO/645/24**, instruido en contra del presunto responsable [REDACTED] quien al momento de los hechos denunciados se desempeñaba como [REDACTED] **SECRETARÍA DE HACIENDA**, por la presunta comisión de la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el artículo 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y

ANTECEDENTES:

1. El día cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, se recibió Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa, presentado por la Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda, en contra del presunto responsable (Páginas 01 a la 116), mismo que se tuvo por admitido el día cinco de noviembre de dos mil veinticuatro (Páginas 117 a la 122), ordenándose emplazar formal y legalmente al presunto responsable, lo que aconteció el día ocho de noviembre de dos mil veinticuatro (Páginas 157 a la 163).

2. El día dos de diciembre de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia inicial en el procedimiento en que se actúa, haciéndose constar la **incomparecencia** del encausado (Páginas 167 a la 170) y derivado de dicha incomparecencia, se tuvieron por ofrecidas las pruebas solo a la investigadora, se declaró cerrado el término para ofrecer las pruebas, en atención a lo dispuesto por el artículo 208, fracciones III y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismas que fueron admitidas en auto dictado en fecha nueve de diciembre de dos mil veinticuatro (Páginas 171 a la 175).

3. Desahogadas las pruebas admitidas y al no existir alguna pendiente de desahogar, mediante auto de trece de enero de dos mil veinticinco (Página 179), se declaró abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes. Hecho lo anterior, esta autoridad resolutoria declaró visto el proceso y citó la causa a oír sentencia definitiva, misma que ahora se pronuncia:

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA

Esta Subsecretaría es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto por el artículo 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación en los artículos 26 apartado C, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y artículos 4, Apartado "A", fracción I, 5, fracción III, inciso a), 8 y 11, fracción I y

último párrafo del Reglamento Interior aplicable de la Secretaría; en coherencia con el artículo 3, fracciones IV y XV y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II. HECHOS CONTROVERTIDOS

Se advierte que la autoridad investigadora, formuló Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por los hechos en él señalados (Páginas 01 a la 13), los cuales consisten medularmente en que el presunto responsable, omitió rendir su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su baja de servicio, a pesar de estar legalmente obligado para ello, hecho el cual la autoridad investigadora calificó como falta administrativa no grave, prevista por el artículo 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Síntesis de hechos que se realiza en aplicación por analogía de la Tesis de Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”¹**

Por su parte el **presunto responsable**, no compareció a la audiencia inicial (Páginas 167 a la 175), aun cuando fue emplazado personalmente para ello en los precisos términos indicados por los artículos 116, fracción II, 193, fracciones I, II y III, 208, fracciones II, III, V, VI y VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Páginas 157 a la 163); artículo 39 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y 171 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia administrativa que nos ocupa; no se vertieron entonces, argumentos de defensa, quedando sólo a su favor, la presunción de inocencia que la Ley le otorga en los artículos 111 y 135 que la citada Ley General les otorga.

Ahora bien, como se advierte de los antecedentes de esta sentencia y acatando el derecho de audiencia consagrado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como también el contenido del artículo 208, fracciones II, III, V, VI y VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta Subsecretaría, respetó en su integridad el derecho a una debida defensa del encausado, al hacerle saber de manera personal y directa los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa; así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas a su favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designare; dándole a conocer que las imputaciones en su contra, derivan de los hechos consignados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (Páginas 01 a la 13) y sus anexos (Páginas 15 a la 116), con las cuales se le corrió traslado en la diligencia de emplazamiento.

¹ Cfr. *Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital: 164618, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. /J. 58/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página 830, Tipo: Jurisprudencia.*



Asimismo, se considera que en el presente procedimiento de responsabilidad administrativa se respetó el debido proceso, enmarcado como un principio universal reconocido en nuestro sistema jurídico, integrado y armonizado al mismo al ser reconocido en los instrumentos internacionales ratificados por México y parte del sistema internacional de derechos humanos, por las consideraciones que en adelante se explican. Lo anterior, en reconocimiento al principio del debido proceso como garante de la legalidad y la correcta aplicación de las leyes en el marco del respecto a la dignidad humana en cualquier tipo de proceso (incluyendo el administrativo disciplinario), de tal forma que constituye uno de los presupuestos indispensables para el sistema de protección de los derechos humanos y su efectividad.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que el debido proceso "...abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial..."; señalando que su aplicación "...no se limita a los recursos judiciales en un sentido estricto, 'sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales' a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos...", lo que implica que la actuación de los órganos estatales dentro de un proceso jurisdiccional o de cualquier naturaleza, se realice en condiciones de igualdad.

De tal manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del caso Cabrera y Montiel Flores Vs. México, del veintiséis de noviembre del dos mil diez, estableció que: "...140. El artículo 8.1 de la Convención consagra los Lineamientos del llamado 'debido proceso legal', que implica, entre otras cosas, el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por el Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la Ley para la determinación de sus derechos..."

En ese tenor, es aplicable la Tesis número 1a. XIII/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 650, Libro V, Febrero 2012, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente:

“...
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales

0186

vigentes en nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan como una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho Tribunal Internacional, en aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutivos de las sentencias en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas...”

Es de precisarse que el debido proceso se instrumentaliza en el procedimiento mediante las formalidades esenciales reconocidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conlleva los siguientes parámetros mínimos:

1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas.
3. La oportunidad de alegar.
4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y;
5. Acceso a un recurso efectivo.

Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número 1.a/J.11/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiocho febrero del dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro número 2005716, misma que a la letra dice:

“...

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: **"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."**, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (I) la notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (III) la oportunidad de alegar; y, (IV) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con



SECRETARÍA AN
Y BLANCA
Subse
2014



un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

En ese orden de ideas, se tiene que, en el caso que nos ocupa, se cumplió cabalmente con el debido proceso, al obrar dentro del presente expediente, constancias que acreditan el debido emplazamiento personal del **presunto responsable**, acaecido el día ocho de noviembre de dos mil veinticuatro (Páginas 157 a la 163), emplazamiento personal, a través del cual, se hizo de su conocimiento, entre otras cosas, los señalamientos de responsabilidad y hechos imputados en su contra, consignados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y anexos (Páginas 01 a la 116); se le corrió traslado con copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente; de igual forma, se hizo de su conocimiento el derecho a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y se le enteró, que de no contar con un defensor, le sería asignado un defensor de oficio; se hizo de su conocimiento, su derecho de ofrecer pruebas y también de alegar lo que sus intereses conviniera; asimismo, se citó al **presunto responsable**, señalándole hora, fecha y lugar ciertos para que compareciera al desahogo de la **audiencia inicial** a su cargo, prevista por el artículo 208 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

III. ESTUDIO DE FONDO

La Autoridad Investigadora denunció por la falta administrativa prevista en el artículo 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, preceptos normativos que a la letra dicen:

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 49.- *Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:*

(...)

IV.- *Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley;*"

En ese sentido, tenemos que, comete una falta administrativa no grave, el servidor público que dejare de presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, en los términos establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y observando la normatividad correspondiente a la reserva o confidencialidad de datos personales.

Así, los elementos que integran la falta administrativa en cita son los siguientes:

- a) Que el sujeto activo tenga el carácter de servidor público;
- b) Que tenga la obligación de presentar su declaración patrimonial y
- c) Que haya incumplido en el tiempo y forma establecida para la presentación de tal declaración.

El primer elemento se acredita con la DOCUMENTAL PÚBLICA agregada a autos, consistente en: copia certificada de NOMBRAMIENTO emitido el día catorce de febrero de dos mil dieciséis, de la cual se advierte que el presunto responsable desempeñó el cargo de [REDACTED]

■ SECRETARÍA DE HACIENDA (Página 61). Documental que merece pleno valor probatorio al tenor de los artículos 131 y 133 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. **Lográndose acreditar con ello, el carácter de servidor público del presunto responsable.**

El segundo elemento en relación con los artículos 32 y 33 fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se acredita con la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la copia certificada del oficio número DGVAP/1132/2023 y anexos, suscrito por el Director General de Verificación y Análisis Patrimonial (Páginas 23 a la 31), mediante el cual remite al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda, el listado de los servidores públicos omisos de esa dependencia, listado dentro del que se encuentra el nombre del presunto responsable, quien fue omiso en presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de conclusión, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su baja del servicio, considerándose que el mismo causó baja el **trece de septiembre de dos mil veintiuno**, tal y como se desprende de la DOCUMENTAL CERTIFICADA, que consiste en OFICIO NÚMERO 02-30-21-2527 (Página 63); Documental que merece pleno valor probatorio al tenor de los artículos 131 y 133 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En este tenor, los artículos 32 y 33 fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la letra dicen:

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 32.- *Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.*

Artículo 33.- *La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:*

(...)



III.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

(...)

*Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, **sin causa justificada**, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas correspondientes.*

Para el caso de omisión, sin causa justificada se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en la presente ley.”

De forma que, es válido sostener que es obligación de todo servidor público el presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación de su empleo, cargo o comisión.

En ese tenor, el presunto responsable tenía la obligación como servidor público de presentar su declaración de conclusión dentro del periodo de los sesenta días naturales siguientes a su baja en el servicio, es decir, dentro de los sesenta días posteriores al trece de septiembre de dos mil veintiuno. Así el presunto responsable, estaba obligado a cumplir con su obligación entre el **catorce de septiembre y el doce de noviembre de dos mil veintiuno**.

Previo a pronunciarnos respecto al tercero de los elementos de la falta administrativa denunciada, es importante establecer que la fracción III, párrafo cuarto, del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obligan a esta resolutoria, a llevar a cabo el análisis sobre la existencia o inexistencia de causa justificada en la omisión de presentar la declaración de conclusión del encargo, considerando que la sanción a imponer, prevista en el antepenúltimo párrafo de las citadas fracciones, se encuentra sujeta o condicionada a la evaluación sobre la existencia o inexistencia de causa justificada, expresada y probada por el presunto responsable, según el contenido de la parte final del mismo párrafo; motivo por el cual, a efecto de dar cumplimiento a la citada obligación, procedemos a analizar si dentro de las constancias del presente expediente, obra alguna que justifique la omisión de presentar su declaración patrimonial de conclusión del encargo en tiempo y forma, concluyendo que en el sumario que se resuelve, no existe constancia alguna que justifique la omisión en la que incurrió.

Ahora bien el **tercer elemento**, consistente en el **incumplimiento** del presunto responsable de la obligación antes precisada, quedó debidamente **acreditada** con las **DOCUMENTALES PÚBLICAS** agregadas en autos, consistentes en el Oficio número **DGI/1721/2024** y su anexo, del cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, suscrito por el Director General de Integridad, mediante el cual remite a la Titular del Órgano Interno de

Control de la Secretaría de Hacienda (Páginas 93 a la 96), la impresión certificada del Sistema Declaranet Sonora, correspondiente al expediente de [REDACTED] [REDACTED]ntro de la cual se desprende, entre otras cosas, que el presunto responsable no presentó su respectiva declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de conclusión, a pesar de haber causado baja el trece de septiembre de dos mil veintiuno, tal y como se desprende del Oficio Número 02-30-21-2527 (Página 63). Documentales que merecen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 131 y 133 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Es por lo anteriormente vertido que, la autoridad investigadora **requirió** al presunto responsable el cumplimiento a su obligación mediante oficio número **OIC-SH-364/2024**, requerimiento que le fue debidamente notificado el día quince de julio de dos mil veinticuatro (Páginas 79 a la 81). Actuación que merece valor probatorio pleno al ser una **DOCUMENTAL PÚBLICA** generada por una autoridad competente con motivo de sus funciones en términos de los artículos 131 y 133 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De forma que, una vez requerido el presunto responsable, para el cumplimiento de su obligación, éste **no presentó** su declaración de situación patrimonial en su modalidad de conclusión, tal y como se desprende de la **DOCUMENTAL PÚBLICA** agregada a autos, consistente en el oficio número **DGI/1721/2024**, de fecha cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, suscrito por el Director General de Integridad, en el que manifiesta que a la fecha del citado oficio el [REDACTED] no había presentado su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de conclusión (Página 93). Documental que merece pleno valor probatorio al tenor de los artículos 130, 131, 133 y 136 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En consecuencia, se estiman **acreditados los elementos** de la falta administrativa no grave consistente en incumplir con la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, toda vez que la autoridad investigadora demostró que el presunto responsable, en su carácter de servidor público, estaba obligado legalmente a presentarla, entre el **catorce de septiembre y el doce de noviembre de dos mil veintiuno** y fue omiso en presentarla en tiempo y forma, en términos de lo establecido por el artículo 33, fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Luego, al no obrar alguna probanza a favor del presunto responsable y al haberse superado la presunción de inocencia del mismo prevista en el artículo 135 de General de Responsabilidades Administrativas y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, de acuerdo al artículo 130 de la ley en cita, es claro que la **conducta imputada quedó plenamente acreditada**.

En consecuencia, se tiene por acreditada la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el **ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**.



IV. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Acreditada que fue la existencia de una falta administrativa no grave y la responsabilidad del presunto, para efecto de determinar la sanción que corresponde, se debe acudir al artículo 76 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismos que a la letra dicen:

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 76.- Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

- I.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio;*
- II.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y*
- III.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el Órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo."*

Los artículos en cita contemplan los factores que han de considerarse para la individualización de la sanción, en atención a ello:

Respecto de los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, de las constancias se advierte que el responsable ostentó el cargo [REDACTED]

[REDACTED] SECRETARÍA DE HACIENDA.

SECRETARÍA DE
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Responsabilidad
Administrativa

Con relación a la **fracción I**, se advierte que el cargo de la responsable era [REDACTED]

[REDACTED] y que tenía una [REDACTED]

[REDACTED] aproximadamente en el servicio público; **elemento este último que le perjudica**, al ser nivel operativo con suficiente tiempo en el servicio público, para conocer las obligaciones que tiene que cumplir en el ejercicio de su función.

Con relación a la **fracción II**, atiende a las condiciones exteriores y los medios de ejecución de la infracción, ésta la constituyó la omisión en la que incurrió el responsable, en su carácter de servidor público, quien estaba obligado legalmente a presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de conclusión, entre el **catorce de septiembre y el doce de noviembre de dos mil veintiuno** y fue omiso en presentarla en tiempo y forma, en términos de lo establecido por el artículo 33, fracción III, de Ley General de Responsabilidades, como ya antes ha sido acreditado, **por tanto le perjudica**.

Atendiendo la **fracción III**, relativa a la reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, esta Resolutora advierte que en la base de datos del Sistema de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales, que se lleva en esta Subsecretaría, no existen antecedentes de sanciones firmes del mismo tipo de responsabilidad administrativa, instruidos en contra del servidor público responsable, **por lo que no le perjudica**.

De todo lo antes señalado, se advierte que **existen tres elementos que le perjudican al individualizar la sanción**.

Ahora, el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, prevén por la comisión de **Faltas Administrativas No Graves**, las siguientes sanciones:

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 75.- *En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas siguientes:*

- I.- Amonestación pública o privada;*
- II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión;*
- III.- Destitución de su empleo, cargo o comisión, y*
- IV.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.*

Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales.

En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.”



SECRETARÍA AN
Y BUEN G.
Subsecretaría de
Resolución - H

De forma que, considerando la mínima y la máxima de la sanción a imponer por la omisión atribuida, habiendo valorado los elementos de prueba que fueron aportados al procedimiento que se ventila y tomando en cuenta los factores establecidos en el artículo 76 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta autoridad estima justo y equitativo, imponer la sanción de **IMPONER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, por un periodo de TRES MESES**, en contra del responsable, lo anterior de conformidad con la fracción IV del artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

V. FALLO

De la valoración de las pruebas conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, quedó plenamente acreditado que el presunto es responsable de cometer la **Falta Administrativa No Grave** prevista en el **Artículo 49**,



fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; por lo tanto, se determina imponer la sanción de **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, por un periodo de TRES MESES**, en contra del responsable, lo anterior de conformidad con la fracción IV del artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con relación a los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente sentencia suprimiendo los datos personales del responsable, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso, por escrito o por medio de autenticación similar, para que sus precitados datos personales puedan difundirse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve al tenor de los siguientes:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO. Esta Subsecretaría de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es y fue competente para conocer y resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando I de esta sentencia.

SEGUNDO. Conforme a lo establecido en el considerando III de la presente sentencia, en autos quedaron plenamente acreditados los elementos de la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el **ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IV DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**, así como la plena responsabilidad del [REDACTED], en su comisión; consecuentemente, se decreta la **EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA** en su contra.

TERCERO. Se le aplica al responsable la sanción de **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, por un periodo de TRES MESES**, en contra del responsable, lo anterior de conformidad con la fracción IV del artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

CUARTO. Se informa al responsable que, en caso de reincidencia, se le impondrá una sanción mayor a la antes establecida, de conformidad con el último párrafo del diverso

artículo 76 de la Ley General de Responsabilidades, el cual define la reincidencia como la comisión de una infracción del mismo tipo de otra ya cometida.

QUINTO. Se hace del conocimiento al responsable que la presente sentencia puede ser impugnada a través del Recurso de Revocación previsto por el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que para ello cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente.

SEXTO. En su oportunidad, previa ejecutoria de la presente sentencia, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar y posteriormente, archívese el presente expediente como asunto total y absolutamente concluido.

NOTIFÍQUESE con copia de la presente sentencia al responsable mediante notificación que se fije en la Tabla de Avisos que se lleva en esta Subsecretaría, comisionándose para tal diligencia a los notificadores y a los testigos de asistencia quienes se encuentran adscritos a esta Subsecretaría.

Asimismo, hágase la publicación respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Unidad Administrativa. Lo anterior con fundamento en el artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, en relación con el 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aplicado de manera supletoria al procedimiento que nos ocupa.

Así lo resolvió y firma el **Mtro. Francisco Javier Zavala Segura**, Subsecretario de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ante los testigos de asistencia, con los que actúa y quienes dan fe. **DAMOS FE.**



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Subsecretaría de Sustanciación
Resolución de Responsabilidades

MTRO. FRANCISCO JAVIER ZAVALA SEGURA

Subsecretario de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades
de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES

LIC. SORAYDA SERRANO CALDERÓN.

Lista.- El 18 de febrero de 2025, se publica en Lista de Acuerdos la Sentencia que antecede. Conste.-